



Roj: **STSJ CAT 2229/2020 - ECLI:ES:TSJCAT:2020:2229**

Id Cendoj: **08019330032020100205**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **3**

Fecha: **11/05/2020**

Nº de Recurso: **44/2019**

Nº de Resolución: **1291/2020**

Procedimiento: **Recurso de apelación. Contencioso**

Ponente: **MANUEL TABOAS BENTANACHS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCIÓN TERCERA**

RECURSO DE APELACION Nº: 44/2019

APELANTE: Dimas

C/ AREA METROPOLITANA DE BARCELONA

#### **S E N T E N C I A Nº 1291**

**Ilustrísimos Señores:**

**Presidente**

**D. JAVIER AGUAYO MEJIA.**

**Magistrados**

**D. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS.**

**D. FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ.**

BARCELONA, a once de mayo de dos mil veinte.

Visto por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el recurso de apelación nº 44/2019, seguido a instancia de Don Dimas , representado por el Procurador Don CARLOS TURRADO MARTIN-MORA, contra el AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, representada por la Letrada Doña MARTA BORRAS RIBO, sobre Urbanismo.

En la tramitación del presente rollo de apelación ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don **Manuel Táboas Bentanachs**.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO.**

1º.- Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona nº 11 y en los autos 242/2016, se dictó Sentencia nº 193, de 7 de septiembre de 2018, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció "DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dimas , contra la Resolución de 10 de mayo de 2016 del ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA por la que se informa desfavorablemente la solicitud de licencia a precario solicitada, acto que declaro ajustado a Derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 1.000 euros".

2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo comparecido la parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 2 de abril de 2020 y que finalmente esta Sentencia se ha podido ultimar y firmar en el día de hoy.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO.

**PRIMERO.-** El 10 de mayo de 2016 la Junta de Govern del Àrea Metropolitana de Barcelona dictó Acuerdo por virtud del que, en esencia, se acordó "EMETRE informe desfavorable en relació amb l'autorització d'usos i obres provisionals" en relación a una "instal·lació d'un aparcament de vehicles" en carretera de la Roca, entre el km 7,7 y 8 de Montcada i Reixac.

Formulado recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona nº 11 y en los autos 242/2016, se dictó Sentencia nº 193, de 7 de septiembre de 2018, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció "DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dimas , contra la Resolución de 10 de mayo de 2016 del ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA por la que se informa desfavorablemente la solicitud de licencia a precario solicitada, acto que declaro ajustado a Derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 1.000 euros".

**SEGUNDO.-** La parte apelante formula sus motivos de apelación que en esencia se dirigen a las siguientes perspectivas:

A) Se alega la relevancia de nuestra Sentencia nº 281, de 15 de marzo de 2002, con cita del artículo 40.c) del Decreto 136/1999, que estimó la compatibilidad urbanística de la actividad de autos y que la sentencia apelada niega.

B) Se sostiene que en relación al Suelo Urbanizable No Programado debe estarse a lo dispuesto en el artículo 91.2 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo.

C) Se insiste en que las obras proyectadas no son de envergadura cuando el pavimentado solo asciende a 125.000 pts. y en total las obras solo alcanzan el importe de 1.612.500 pts.

D) Se critica que se haya razonado sobre una nueva solicitud que no se localiza.

E) Se critica que se haga referencia a una doble calificación bien de red viaria básica -clave 5- y de protección de sistemas -clave 9- en Suelo Urbanizable No Programado bien de forestal en Suelo No Urbanizable.

F) No se resuelve el ordenamiento aplicable a una solicitud de 1999 con resolución de 2016.

G) No se está de acuerdo que un estacionamiento a cielo abierto sea una actividad comercial o industrial negando la argumentación con base en el artículo 272 o 280 del Plan General Metropolitano ya que debe estarse a lo establecido en el artículo 61.1.b) del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo.

H) Se critica la argumentación para suelos de especial protección que no se ha tenido en cuenta en vía administrativa.

I) En todo caso se alega el artículo 47.6 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.

La parte apelada contradice los argumentos de la parte apelante.

**TERCERO.-** Examinando detenidamente las alegaciones contradictorias formuladas por las partes contendientes en el presente recurso de apelación, a la luz de la prueba con que se cuenta -con especial mención de las obrantes en los correspondientes ramos de prueba del proceso seguido en primera instancia y que en concreto solo apunta a las documentales con que se cuenta-, debe señalarse que la decisión del presente caso deriva de lo siguiente:

1.- Ya de entrada procede advertir el profundo dislate y desatino que va resultando de lo que se observa en el expediente administrativo para una titulación ambiental que hunde sus raíces temporalmente en una *solicitud presentada el 12 de julio de 1999 (sic)*, es decir, en su momento en el ámbito temporal de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración ambiental, y se adaptan sus anexos, y *que finalmente alcanza el Acuerdo de 10 de mayo de 2016 (sic)* de la Junta de Govern del Àrea Metropolitana de Barcelona por virtud del que, en esencia, se acordó "EMETRE informe desfavorable en relació amb l'autorització d'usos i obres provisionals" en relación a una "instal·lació d'un aparcament de vehicles" en carretera de la Roca, entre el km 7,7 y 8 de Montcada i Reixac.

Más de 17 años de tramitación administrativa sin necesidad de añadir el tiempo que se ha tenido que añadir en esta vía jurisdiccional contencioso administrativa.

Podrá indicarse que el supuesto es complejo y como se irá viendo, si se nos permite la expresión, no se ha quedado quieto por las actuaciones de la parte recurrente pero, sea como fuere, si una cosa queda clara es que no se ha atendido debidamente a lo que es y debe ser una regular y aceptable tramitación administrativa.

Más todavía cuando, como no les puede pasar desapercibido a las partes, este tribunal ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el caso en nuestra Sentencia nº 281, de 15 de marzo de 2002, recaída en nuestro recurso de apelación 68/2001, de la que merecen relacionarse los siguientes particulares:

**"PRIMERO.-** Don Dimas y el AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXACH se alzan contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2001 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de los de Barcelona.

**SEGUNDO.-** El Ayuntamiento de Montcada i Reixach dictó resolución el 17 de noviembre de 1.999 **teniendo por desistido** a Don Dimas **de la petición de licencia municipal "a precario"** para ejercer la actividad de aparcamiento de vehículos automóviles entre los P.K. 7'7 y 8'05 de la Carretera de la Roca **ordenando el archivo del expediente.**

Interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Juzgado nº 7 de Barcelona se sustanció con el nº 263/99 finalizando por sentencia de 20 de enero de 2001 en la que se estima la demanda declarando la nulidad de la resolución impugnada y teniendo por cumplimentada la presentación del certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y ordenando al Ayuntamiento que continúe la tramitación del procedimiento administrativo hasta su efectiva finalización.

**TERCERO.-** Como cuestión previa y antes de analizar las alegaciones formuladas por el actor contra la sentencia de instancia conviene precisar que en el escrito de interposición del recurso se impugna la resolución que el Ayuntamiento de Montcada i Reixach dictó el 17 de noviembre de 1.999 que acuerda "tener por desistido al actor en la solicitud de licencia "a precario" para aparcamiento de vehículos en la Carretera de la Roca y el archivo de las actuaciones".

En la demanda, se deducen como pretensiones que se le otorgue licencia de obras y que se archive un expediente sancionador incoado por ejercer la actividad sin licencia, sin perjuicio de que se decrete la nulidad del acuerdo impugnado.

Tal pretensión incurre en **desviación procesal** por aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 25 de la L.J.C.A de 1.998 en relación con los artículos 31, 32, 33, 45, 52 y 56 del citado ordenamiento, en los que la delimitación objeto litigioso se hace en dos momentos distintos, uno, en el de interposición del recurso, en el que habrá que indicarse el acto o disposición contra el que se formula, y otro, en el de la demanda, sin que sea lícito extenderlos a actos distintos de los inicialmente delimitados, pues permitirlo supondría prescindir de la naturaleza esencialmente revisora del orden jurisdiccional contencioso administrativo al incidirse en desviación procesal, razón por la cual en caso de ejercitarse pretensiones sin ninguna relación con el acto impugnado, cual ocurre con la solicitud de otorgamiento de una licencia de obras (sic) y el archivo de un expediente sancionador, procederá declarar su inadmisibilidad sin analizar el fondo de dichas pretensiones, lo que correctamente se deduce de la sentencia impugnada.

**CUARTO.-** Alega el actor apelante, que las licencias solicitadas habían sido obtenidas por **silencio administrativo** por inactividad del Ayuntamiento desde que expidió el certificado de compatibilidad el 5 de noviembre de 1.999; sin embargo, no cabe confundir la expedición de un certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico que es uno de los documentos que deben acompañar una petición de licencia de actividad (artº 27.1.c) de la Ley de Intervención Integral de la Administración Ambiental de 27 de febrero de 1.998 y artº 54.2 del Reglamento de 21 de mayo de 1.999 dictado para su aplicación) con las garantías establecidas en el artº 91.1 y 2 en relación con el 247 del T.R. de 1990, sobre normas urbanísticas aplicables en Cataluña, que requiere, por una parte, **informe favorable** de la Comisión de Urbanismo y, por otra, que **en ningún caso se entenderan adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de los principios contenidos en la Ley**, Planes, Proyectos, Programas y, en su caso, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, cuando la actividad solicitada afecta al sistema viario básico (clave 5.a) y a la protección de sistemas generales (clave 9) conforme establece el artº 9 del P.G.M y se acredita en el proceso.

**QUINTO.-** Se imputa a la sentencia **falta de congruencia** al no pronunciarse sobre actuaciones realizadas por el Ayuntamiento fuera de su competencia, argumentando que la Diputación de Barcelona, respecto a la ubicación del aparcamiento de vehículos entre los P.K. 7'7 y 8'05 de la Carretera de la Roca (BV-5001), dió su conformidad a las obras, lo que no impide que se cumplan, además, los determinaciones de otras competencias concurrentes, suponiendo tal informe **uno de los documentos necesarios** para la resolución del expediente, es decir, uno de los múltiples documentos que lo componen, por lo que tal alegación debe ser desestimada.

**SEXTO.**-Igualmente, carece de consistencia la alegación de falta de pronunciamiento sobre la **autorización o licencia ambiental**, que estima el apelante haber obtenido por silencio al haber transcurrido cuatro meses desde su petición, invocando para ello tanto el artc 32.3 de la Ley de 1.998 como el 48.3 del Reglamento para su aplicación; sin embargo tal petición no ha sido formulada en la demanda y su aportación, es también un documento que ha de adjuntarse al expediente, para ser valorado como tal cuando el Ayuntamiento se pronuncie sobre el otorgamiento o denegación de la licencia y tiene, en su conjunto, que cumplir previamente la garantía del **informe favorable de la C.U.B** al tratarse de licencia provisional o "a precario" del artc. 91.1 y 2 del T.R. de 1.990 anteriormente citado.

**SÉPTIMO.**- No existe error ninguno al considerar la sentencia impugnada que el **expediente sancionador** es independiente del objeto de este proceso, por cuanto las infracciones urbanísticas consistentes en ejecutar obras o ejercer actividades sin licencia, son totalmente diferentes de los expedientes incoados para la protección de la legalidad urbanística (artcs 254 y 262 y s.s. del T.R. de 1.990), ello sin perjuicio de que como se dijo en el fundamento tercero de esta resolución, integra un supuesto de desviación procesal, por cuanto lo solicitado es una licencia de actividad "a precario".

**OCTAVO.**- Por último, el actor alega **error en la valoración de la prueba** estimando que la emisión por la CUB fuera de plazo del informe del artc 91.2 del T.R. de 1.990 no es vinculante, cuestión que además de no ser cierta, puesto que sí lo es y, necesariamente si fuese desfavorable el Ayuntamiento tiene que denegar la licencia, tampoco tiene incidencia en el fondo del asunto toda vez que lo impugnado **fue un supuesto desistimiento que la propia sentencia ha rechazado**.

**NOVENO.**- Por su parte, el Ayuntamiento de Montcada i Reixach que se ha adherido a la apelación solo cuestiona el fallo en cuanto la sentencia establece como pronunciamiento "tener por cumplimentado el trámite de presentación del certificado de compatibilidad".

La Administración discrepa de tal cumplimiento al contener el certificado el tenor literal siguiente: "respecto a la actividad proyectada, la capacidad de los servicios públicos es insuficiente para atender requerimientos de la actividad proyectada o para llegar a obtenerlos".

De todo ello deduce que dicho contenido se ajusta a lo prevenido en el artc 54.2 y 3 del Reglamento de Intervención Integral 136/99 y, toda vez que el actor en su demanda no cuestionó tal extremo, ni ha acreditado lo contrario, no procede analizar sus efectos como hace el Juez al rebatir su incompatibilidad con el planeamiento urbanístico.

La cuestión suscitada, en este momento procesal, es irrelevante; como ya se dijo el certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, es uno de los muchos documentos que han de acompañar a la solicitud de licencia o autorización ambiental cuyo contenido es reglado conforme a lo dispuesto en el artcº 54.2 del Reglamento tantas veces repetido, cuya aportación por el peticionario al expediente (o su no expedición dentro de plazo) permite iniciar el procedimiento de autorización (artc 54.3) que es lo que cabalmente acuerda la sentencia impugnada lo que es consecuencia de la necesaria congruencia que consiste en la adecuación de los pronunciamientos del fallo y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de esas pretensiones (artc 218.1 de la L.E.C. de 2000)

**DÉCIMO.**- Por lo expuesto, procede la íntegra confirmación de la sentencia apelada, sin que existan méritos para una imposición de costas en esta alzada, al desestimarse las alegaciones de las partes contendientes, conforme a lo establecido en el artc 139.2 de la L.J.C.A de 1.998.

## FALLAMOS

Que DESESTIMAMOS los recursos de apelación interpuestos por Don Dimas y el AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXACH contra la sentencia de 20 de enero de 2.001 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Barcelona, la que se confirma íntegramente. Sin Costas.

Con certificación de la presente resolución remítanse los autos originales al Juzgado de su procedencia para su notificación a las partes y ejecución correspondiente.

Hágase saber que la presente sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso ordinario ni extraordinario alguno".

No se pase por alto que la Sentencia referida solo determina la necesidad de seguir el trámite sin prejuzgar nada de fondo y que todavía nos hallamos en la tramitación de esa titulación ambiental para obras y usos de carácter provisional que solo ha alcanzado el informe desfavorable del ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 36.a) de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Area Metropolitana de Barcelona, en cuanto a la materia competencial, pero que desde la ubicación del supuesto a 1999 obliga a tener en cuenta las sucesivos regímenes legales:

- *urbanísticos*, no solo del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, sino de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, y del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, todos ellos con sus modificaciones y su desarrollo reglamentario hasta el Acuerdo de 10 de mayo de 2016.

- y *ambientales*, no solo de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, sino de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, con sus modificaciones y su desarrollo reglamentario hasta el Acuerdo de 10 de mayo de 2016.

2.- Llegados a las presentes alturas, este tribunal debe centrar debidamente el caso a enjuiciar sin que por razón de los intereses públicos y de tercero se deba ver arrastrado por pluralidad de alegatos de las partes que en nada favorecen el recto entendimiento del caso y que pese a cierta complejidad no deja de ser de atendible comprensión a buenos entendedores. Todo ello claro está sin desbordar el principio de congruencia cuando todas las partes son perfectamente conscientes de lo actuado en el procedimiento administrativo y que, de por sí, también si se nos permite la expresión, habla por sí mismo.

Por consiguiente procede ir señalando lo siguiente:

2.1.- Debe despojarse el cúmulo de más y más papeles en el expediente administrativo de lo que es *un procedimiento a solicitud del interesado para obtener una titulación habilitante*, de lo que es y debe ser *cada uno de los procedimientos de oficio para reaccionar contra obras o actividades sin titulación habilitante* bien por la vía urbanística o por la vía ambiental. Nos debe ocupar sólo la primera perspectiva.

2.2.- La titulación habilitante que se interesa es la consistente en:

- *una legalización "ex post"* de obras y usos que se iban desarrollando sin titulación urbanística de obras municipal y sin titulación ambiental de actividades.

- Una interesada obtención de *titulación ambiental bajo la perspectiva de obras o usos de carácter provisional* que, cuanto menos, nadie duda que requería de compatibilidad urbanística al respecto.

- Sobre unos terrenos que se hallaban clasificados por el *Plan General Metropolitano de Barcelona, aprobado definitivamente a 14 de julio de 1976*, como Suelo Urbanizable No Programado y calificados urbanísticamente en parte como sistema viario básico -clave 5- y de protección de sistemas generales -clave 9-, pero que en el devenir temporal en discurso van siendo afectados por:

*El Pla Especial de Protecció i Millora de Sector Sud de la Serralada de la Marina aprobado definitivamente a 16 de abril de 2002.*

*Y el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona aprobado definitivamente a 20 de abril de 2010.*

2.3.- *Procedimentalmente y en razón sustantiva de la materia ambiental* deberá destacarse que por razones temporales resultaba aplicable en principio el procedimiento de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración ambiental, con sus disposiciones reglamentarias, bastando remitirse a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.

Ahora bien, no debe pasarse por alto que, cuanto menos, *por razón de hallarnos en el ámbito urbanístico de usos u obras de carácter provisional* no se puede sustraer el procedimiento a las garantías de la intervención que se exige en esa vertiente -así en los artículos 91.2 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, 53 y 54 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, 53 y 54 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, y 53 y 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, y en relación con el artículo 36.a) de la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Area Metropolitana de Barcelona-.

Es más, en el presente caso no resulta ocioso indicar que un razonado entendimiento de los elementos y requisitos de la solicitud a presentar y una tramitación que no se centrase en una sola temática para posteriormente descubrir otra y así sucesivamente sino que se abordase todo lo que integralmente merezca el supuesto que se presente, debió ser lo verdaderamente saludable para el buen fin de la tramitación a seguir y para la defensa de los inalienables intereses jurídico públicos y de tercero, también los del solicitante, evitando prácticas disfuncionales o complejidades o demoras indeseables que en nada han ayudado a resolver el caso.

En todo caso *no cabe confundir el régimen transitorio del procedimiento en materia ambiental o amalgamarlo improcedentemente con el de naturaleza urbanística* de las Disposiciones Transitorias 6ª de la Ley 2/2002, de



14 de marzo, de Urbanismo, 11ª del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, y 14ª del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con sus modificaciones.

2.4.- *Por razones de fondo en la materia ambiental que nos ocupa pero en la inevitable vertiente urbanística, interesa ir centrando el caso de la siguiente manera:*

- Ya de entrada será de notar que si una cosa debe quedar clara y nítida es que *en la materia de titulación habilitante que nos ocupa es que nos hallamos innegablemente en un ámbito reglado, rabiosamente reglado*, que no permite atisbo alguno de discrecionalidad en la concesión o denegación de la correspondiente titulación habilitante, sea de legalización "ex post", sea de usos u obras de carácter provisional, sea para terrenos clasificados de Suelo Urbanizable No Programado y afectos a sistemas, sea un supuesto que originariamente estaba afecto a una figura de planeamiento urbanístico general y sucesivamente afecto a la ordenación del plan especial y del planeamiento territorial que se ha indicado precedentemente.

- Así, *si se pretende una legalización "ex post" y en esa titulación especial*, lo que no cabe es fraudulentamente ir modificando el proyecto con más ambición cada vez y además silenciando la real entidad del caso.

Una vez se examina lo actuado y cuanto menos hasta tres aportaciones de proyectos constan en el expediente administrativo cuya resultancia debe darse por reproducida -así a folios 2 y siguientes acompañado en la instancia presentada a 12 de julio de 1999 para con un área de estacionamiento de vehículos (sic), a folios 230 y siguientes con fecha de registro de entrada a 11 de octubre de 2002, en el que además de área de estacionamiento de vehículos aparece un área de compraventa de vehículos (sic), como resulta de su plano 1 obrante a página 248 y a los folios 277 y siguientes con fecha de registro de entrada a 3 de julio de 2003, todos ellos de las copias del expediente administrativo remitidas-. Obsérvese que nada se discute sobre que en la realidad consta informe de fecha 25 de febrero de 2003 del arquitecto técnico municipal en el sentido que en el emplazamiento de autos se desarrollan dos actividades diferenciadas, una destinada a aparcamiento de camiones y otra a la venta de vehículos.

Se examine como se examine el caso -en las órbitas del artículo 254 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, o del artículo 197 y siguientes de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, o del artículo 197 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, o de los artículos 205 y siguientes del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, todos ellos con sus modificaciones, y demás disposiciones concordantes- resulta manifiesto que debe estarse a lo que realmente concurre no desbordando el último esfuerzo del ordenamiento jurídico urbanístico para llevar a la legalidad lo que es susceptible de ello ya que caso contrario las consecuencias de rigor deben imponerse ante esta situación especial.

- Efectivamente *nada hay que objetar a que en principio nos hallamos ante Suelo Urbanizable No Programado del Plan General Metropolitano de Barcelona de 1976 y que debe estarse, en su momento, al régimen de Suelo No Urbanizable* en aplicación de los artículos 127 y 128 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, y por el juego concordado de la Disposición Transitoria Primera y de los artículos 47 y 52 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, de la Disposición Transitoria Primera y de los artículos 47 y 52 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, y de la Disposición Transitoria Segunda y artículos 47 y 52 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con sus modificaciones y demás disposiciones concordantes.

Ahora bien, **una cosa es una titulación habilitante especial en materia de Suelo No Urbanizable y otra cosa es que además se pretenda en ese suelo la titulación extraordinaria y excepcional de usos u obras de carácter provisional** ya que efectivamente *mucho más allá de las exigencias de la titulación especial para Suelo No Urbanizable nos hallamos ante las rigurosas exigencias de la titulación extraordinaria y excepcional de esa materia para con usos u obras de carácter provisional* que se contiene en los artículos 91.2 del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la legislación vigente en materia de urbanismo, 53 y 54 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, 53 y 54 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo, y 53 y 54 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, con sus modificaciones y demás disposiciones concordantes.

Y a no dudarlo los supuestos a comprender en su ámbito no solo a interpretar estrictamente como si fueran para la titulación en Suelo No urbanizable sino de forma restrictiva habida cuenta de la naturaleza de la titulación para usos u obras de carácter provisional que se indica a término final y plagada de condiciones suspensivas y resolutorias ya que a no dudarlo se trata de usos u obras "contra plan" y que el

ordenamiento jurídico urbanístico solo permite provisionalmente o temporalmente para asegurar un mínimo de aprovechamiento económico al titular de los terrenos.

2.5.- Y a las presentes alturas interesa no perder de vista que *nos hallamos ante titulación ambiental -como debe ser sabido de tracto sucesivo* que sigue y persigue la actividad desde antes que se desarrolle hasta que la misma cesa- pero que por imperativo legal exige conformidad urbanística a poner de manifiesto por regla general ya en la solicitud inicial (por todos baste la cita de los artículos 14.1.d) y 27.1.c) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, artículos 17.1.d), 33.2.a), 39.1 y 60 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, y demás disposiciones concordantes) y resulta que la conformidad urbanística se adopta en un procedimiento que en principio solo se pronuncia sobre esa conformidad en un tiempo determinado y anterior a la solicitud de la titulación ambiental.

Ello plantea la temática de *cuál es el ordenamiento aplicable -ambiental y urbanístico- a la titulación ambiental* si lo es el de la fecha de la solicitud de la titulación ambiental (sic) o el de la fecha de la solicitud o de la emisión del documento de la conformidad urbanística (sic) o el de la fecha de la resolución de la titulación ambiental (sic) cuando a nadie se le escapa que entre esas fechas puede haber nuevo ordenamiento legal, reglamentario o de planeamiento de la más variada naturaleza, también ambiental o/y urbanístico, o inclusive la operatividad de suspensión de tramitaciones en la órbita urbanística o de pronunciamientos jurisdiccionales en ejecución provisional o firmes, entre otros supuestos que pueden incidir sobre el caso con sus innegables intereses jurídico públicos.

En este punto y solo desde la perspectiva urbanística y para el ordenamiento aplicable a la titulación habilitante urbanística este tribunal contaba en su momento con la conocida doctrina que en abreviada síntesis obligaba a estar al ordenamiento aplicable a la fecha de resolver y si se resolvía y notificaba dentro de plazo, pero caso contrario -fuera de plazo- se debía estar al ordenamiento aplicable a la fecha de la solicitud efectuada en su momento.

No obstante en Cataluña y a partir del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo, se ha tenido que resituar ese planteamiento para el ordenamiento aplicable a la titulación habilitante urbanística, a no dudarlo de tracto único, a resultas de lo establecido en su artículo 235 al disponer:

"Artículo 235. Otorgamiento de las licencias urbanísticas.

Las licencias se otorgan de acuerdo con las previsiones de la legislación y el planeamiento urbanístico vigentes en el momento de su resolución, o en la fecha en que se entienden producidos los efectos de la falta de resolución expresa de la solicitud".

Y esa apreciación se ha ido aplicando también en materia de titulación ambiental con mayor motivo ya que no es solo que en la misma se halla insita la materia urbanística, como ya se ha razonado, sino que además por cuanto ese régimen se ajusta debidamente a la naturaleza de tracto sucesivo de los títulos habilitantes ambientales. Criterio y doctrina que procede reiterar también en este caso.

2.6.- Sentado lo anterior la decisión del presente caso se determina del siguiente modo:

2.6.1.- *Desde la perspectiva de una titulación habilitante ambiental de legalización "ex post"*, solo cabe indicar que no es la temática que se suscita ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional por lo que a esta Sentencia solo le cabe indicar "obiter dicta" que no asiste la razón a la parte recurrente cuando las alteraciones, intencionalmente disimuladas y fraudulentas, que se han producido de zona de aparcamiento de vehículos hasta zona de compraventa de vehículos, en modo alguno pueden viabilizarse.

2.6.2.- *En materia estrictamente ambiental no debe dudarse que la solicitud efectuada efectivamente determinada, completa e integral en sus términos solo se alcanzó a 3 de julio de 2003* por lo que huelga hablar de que pudiera ser aplicable ordenamiento alguno anterior a esa fecha.

Pero es que, por lo expuesto, ya que se centra el caso en sede de licencia ambiental, *procede estar al plazo de resolver establecido en el artículo 32 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención Integral de la Administración Ambiental, lo que obliga a estar, en lo que ahora interesa y en la órbita urbanística, a lo establecido legalmente en la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, en su redacción originaria, y en concreto y en principio a las figuras de planeamiento del Plan General Metropolitano de Barcelona aprobado definitivamente a 14 de julio de 1976 y al Pla Especial de Protecció i Millora de Sector Sud de la Serralada de la Marina, aprobado definitivamente a 16 de abril de 2002.* Y ello es así ya que no consta que por la complejidad subyacente pudiera llegarse a prorrogar el plazo de resolución para que fuese aplicable legalmente ni la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la anterior ni en sede de planeamiento territorial el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, aprobado definitivamente a 20 de abril de 2010. Desde luego a salvo, en su caso, su incidencia en controles posteriores.



2.6.3.- El verdadero centro de gravedad del caso a enjuiciar no radica en el estricto régimen de obras y de usos en Suelo No Urbanizable del artículo 47 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, sino del régimen restrictivo de obras y usos del artículo 53.3 y 4 de ese mismo texto legal, ya que como se ha expuesto no nos hallamos en una titulación habilitante perfecta y especial por razón del objeto -en Suelo No Urbanizable- sino en la titulación habilitante extraordinaria y excepcional de uso y obra de carácter provisional a término final y preñada, si se nos vuelve a permitir la expresión, de pluralidad de condiciones suspensivas y resolutorias que deben darse por conocidas y precisamente desde el ordenamiento urbanístico en relación al ordenamiento de las titulaciones ambientales. Preceptos que procede relacionar del siguiente modo:

"3. Sólo pueden ser admitidos como usos provisionales, a los efectos de lo que establece el apartado 1, el almacenaje o el depósito simples y puros de mercancías o de bienes muebles, la prestación de servicios particulares a la ciudadanía, las actividades del sector primario, las actividades comerciales relacionadas con el sector mencionado y las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales. No se admiten como usos provisionales los usos residenciales ni los usos industriales.

4. Las obras ejecutadas con vista a los usos provisionales mencionados por el apartado 3 deben ser las mínimas que sean imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, pero no deben omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas por la legislación sectorial, que se tienen que acreditar en la memoria justificativa que hay que presentar a estos efectos".

Pues bien, atendiendo a las específicas características del caso que se enjuicia, sin más elementos que los que constan en la documental de que se dispone, este tribunal forma cumplida convicción que el conjunto del proyecto sucesivamente adicionado de autos no colma ni las exigencias de ese régimen de usos ni de obras que como se ha expuesto debe interpretarse restrictivamente.

No se colman las exigencias de los limitados usos que se permiten en esa naturaleza cuando, se quiera ver o no, la actividad o uso urbanístico de aparcamiento de camiones en la forma interesada y la actividad de compraventa de vehículos en forma alguna se compadece ni se ajusta a los únicamente admitidos de almacenaje o el depósito simples y puros de mercancías o de bienes muebles, la prestación de servicios particulares a la ciudadanía, las actividades del sector primario, las actividades comerciales relacionadas con el sector mencionado y las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales.

Y tampoco y en su consecuencia las de obras que deberían corresponder a esos usos pero admisibles y precisamente mínimas e imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables.

Por todo ello, procede desestimar el presente recurso de apelación en la forma y términos que se fijarán en la parte dispositiva.

**CUARTO.-** A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 y atendida la desestimación acaecida, sin que se aprecien méritos en contrario, con las disfuncionales conductas de la parte recurrente y de la parte recurrida en especial en vía administrativa no procede condenar en costas a ninguna de las partes.

## FALLAMOS

**DESESTIMAMOS** el presente recurso de apelación interpuesto a nombre de Don **Dimas** contra la Sentencia nº 193, de 7 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona nº 11, recaída en los autos 242/2016, cuya parte dispositiva en la parte menester estableció "DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dimas , contra la Resolución de 10 de mayo de 2016 del ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA por la que se informa desfavorablemente la solicitud de licencia a precario solicitada, acto que declaro ajustado a Derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 1.000 euros", **QUE SE CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE CON LOS ARGUMENTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA.**

No se condena en las costas del presente recurso de apelación a ninguna de las partes.

La presente Sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y, adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.





**Remítanse al Juzgado de procedencia las actuaciones recibidas con certificación de la presente sentencia y atento oficio para que se lleve a efecto lo resuelto.**

Así por esta Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ